

No obstante, la multa podrá abonarse con anterioridad a dicha notificación en las cuentas del Tesoro Público de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de su domicilio social, debiendo remitir copia del correspondiente justificante de dicho ingreso a este Instituto.

Madrid, 22 de abril de 2005.—El Secretario General, José Luis Menoyo González.

Anexo

Relación de: N.º de expedientes, sociedades inculpadas, domicilios sociales, cifras de capital social (euros) y multa impuesta (euros) para cada sociedad

2004011696; Activisa, S.A.; José León de Carranza. Edif. Delfín, 8, 11011 Cádiz; 901.518,16; 16.656,22.

2004011704; Acumar, S.A.; Avd. de Andalucía, 85, 11007 Cádiz; 126.212,54; 5.139,52.

2004011713; Proelsur S.A.L.; Ronda de Vigilancia Zona Franca, s/n., 11011 Cádiz; 361.809,29; 9.911,99.

2004011759; Revestimiento Interiores Solus, S.L.; Cl Cabo Salina n.º 8, 11205 Algeciras (Cádiz); 500.156,00; 11.960,81.

2004011768; Las Cuatro Niñas, S.A.; Finca Las Cuatro Niñas, Montealegre Alto 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz); 1.352.277,23; 20.792,02.

2004011812; Ferrys del Mediterráneo, S.A.; Calle Teniente Riera número 5 y 7, 7.º D, 11201 Algeciras (Cádiz); 1.803.036,31; 24.278,65.

2004011867; Andrés Molina, S.A.; Pasaje Ripalda, n.º 12, puerta 13, 46002 Valencia; 576.971,62; 12.975,79.

18.979/05. **Acuerdo de la Directora General del Patrimonio del Estado de fecha 1 de marzo de 2005, sobre incoación de expediente de investigación de un inmueble sito en Córdoba, calle Cristo, número 21.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 33/2003 de 3 de noviembre y, el Reglamento del Patrimonio del Estado, se publica el presente anuncio para determinar la propiedad del inmueble siguiente:

Solar de 184 metros cuadrados, sito en Córdoba, calle Cristo, número 21. Referencia Catastral 4551323UG4945S0001DU, linda por la derecha con la casa número 23, por la izquierda con la número 19 y por el fondo con la número 15.

Lo que se hace público para general conocimiento de cuantas personas puedan tener interés en el expediente y, se comunica que este anuncio una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba, por un plazo de quince días, y que una vez finalizado el mismo y durante el plazo de un mes, podrán los afectados por el expediente de investigación, alegar por escrito, cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Delegación de Economía y Hacienda de Córdoba, en unión de todos los documentos en que funden sus alegaciones.

Córdoba, 20 de abril de 2005.—La Delegada de Economía y Hacienda en Córdoba, Paloma Morales Fernández.

18.983/05. **Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control, de la Dirección General de Fondos Comunitarios, por el que se notifica el inicio del expediente de incumplimiento de incentivos regionales, GR/398/P08 (E.I. 12/05).**

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente edicto se pone en conocimiento de la empresa Plásticos Agrícolas Europa, S. A. titular del expediente GR/398/P08 (E.I. 12/05), que con fecha 29/03/2005 la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, ha acordado iniciar expediente de incumplimiento, al estimar que la entidad no ha cumplido las condiciones de la Resolución Individual de Concesión de Incentivos Regionales de fecha 19/06/2002, relativas a:

Acreditación del cumplimiento de las obligaciones Fiscales.

Acreditación del cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

Inversión.

Fondos propios.

No se ha acreditado la inscripción en el Registro Industrial de los bienes de equipo subvencionados.

El expediente se pone de manifiesto a la entidad, en este Centro Directivo, sito en Madrid, C/ María de Molina 50, planta 2.ª, previa petición de hora a los teléfonos: 91-545.08.04 ó 91-545.09.24, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y se le concede un plazo de quince días para que alegue y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes a su derecho.

Madrid, 26 de abril de 2005.—El Subdirector General de Inspección y Control, Rafael Cortés Sánchez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

18.981/05. **Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil sobre notificación relativa al procedimiento sancionador por infracción al Reglamento de Explosivos contra don Antonio Moncayo Torrejón.**

Por el presente anuncio se notifica a don Antonio Moncayo Torrejón, al cual no ha podido ser notificado en su último domicilio conocido, la siguiente resolución dictada por la Dirección General de la Guardia Civil de fecha 25 de enero de 2005:

Visto el procedimiento sancionador núm. 09/04/S/04 instruido contra don Antonio Moncayo Torrejón (28.443.425-S), con domicilio en Bilbao (Vizcaya), C/ Músico Usandizaga, núm. 1, 1.º A, titular de un puesto de venta ambulante el día de los hechos en la localidad de Miranda de Arga (Navarra), resultan los siguientes

I. Antecedentes de hecho

Primero.—Acordó la iniciación del procedimiento el Ilmo. Sr. Teniente Coronel Jefe Acctal. de la IX.ª Zona de la Guardia Civil (C.A. de Navarra), por delegación del Director General del Cuerpo (Orden INT/2992/2002, de 21 de noviembre, BOE 285, de 28 de noviembre), en virtud de lo dispuesto en el art. 300.1.d) del Reglamento de Explosivos aprobado por Real Decreto 230/98, de 16 de febrero (BOE núm. 61, de 12 de marzo), mediante resolución de 1 de septiembre de 2004 y en averiguación de una presunta infracción grave prevista en el artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE, núm. 46, de 22 de febrero), modificada por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto (BOE núm. 186 de 5 de agosto) y por Ley 10/1999, de 21 de abril (BOE núm. 96 de 22 de abril) en adelante LOPSC. Se ha tramitado el expediente conforme al procedimiento establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12 de 14 de enero) en adelante LRJ-PAC y el Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (BOE núm. 189 de 9 de agosto), en adelante RPS.

Segundo.—De lo actuado en el procedimiento ha resultado acreditado que a las 18'00 horas del día 24 de agosto de 2004, con motivo de la inspección efectuada por la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Tafalla (Navarra), se pudo constatar que el expediente titular del puesto ambulante anteriormente citado, se encontraba ejerciendo el comercio ambulante de los productos pirotécnicos catalogados consignados en el oficio-denuncia obrante al folio 3 del procedimiento, sin contar con la preceptiva autorización gubernativa, agravada su conducta por ser efectuada, además de sin autorización, de forma ambulante, actividad expresamente prohibida por el Reglamento al ser una de las modalidades

de venta que más riesgos genera para la seguridad ciudadana.

Los artificios pirotécnicos objeto de la infracción fueron intervenidos por los agentes que llevaron a cabo la inspección.

Tercero.—Tales hechos resultan de la instrucción del expediente. El Instructor califica los mismos como constitutivos de una infracción grave del artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992 y propone la sanción de multa de trescientos euros con cincuenta y dos céntimos (300,52 €) e incautación de los artificios pirotécnicos objeto de la infracción.

Cuarto.—El Instructor ha elevado a esta Dirección General de la Guardia Civil, el procedimiento instruido junto con la correspondiente propuesta de resolución.

Quinto.—En la tramitación del procedimiento se ha dado audiencia al expedientado, notificándole el acuerdo de inicio, que al no haber efectuado alegaciones a éste, se ha convertido en propuesta de resolución, en virtud del art. 84.4 de la LRJ-PAC y art. 13.2 del RPS.

II. Fundamentos de derecho

Primero.—De las actuaciones practicadas, resulta que los hechos probados constituyen una infracción grave tipificada en el artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992 y artículo 294.b) del Reglamento de Explosivos, bajo el concepto de «El comercio de artificios pirotécnicos catalogados careciendo de la documentación o de las autorizaciones necesarias», por contravención del art. 6.1 de la mencionada Ley y artículos 188, 194, 198 e ITC núm. 19 del citado texto reglamentario, de cuyos preceptos normativos se infiere que se entenderá por personas autorizadas para la venta y suministro de artificios pirotécnicos aquellas personas, físicas o jurídicas, que cuenten con un depósito autorizado o con un establecimiento autorizado en la forma y con las condiciones establecidas en el artículo 188 y aquellas otras personas que, careciendo de los mencionados establecimientos, obtengan una autorización expresa del Delegado del Gobierno correspondiente, previo informe del Área de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil correspondiente. Autorización que no había solicitado el expedientado ni obviamente le había sido concedida, prohibiendo por otra parte el Reglamento de forma expresa el comercio ambulante de pirotecnia. Infracción que, conforme con lo dispuesto en los preceptos referenciados, puede ser sancionada, con multa desde trescientos euros con cincuenta y un céntimos (300,51 €) a treinta mil cincuenta euros con sesenta y un céntimos (30.050,61 €) incautación del material aprehendido y, en su caso, cierre del establecimiento donde se produzca la infracción por un periodo no superior a seis meses.

Segundo.—El art. 300.1.d) del Reglamento de Explosivos, dispone que en materia de fabricación, almacenamiento, distribución, circulación y comercio, será competente para la imposición de sanciones por infracciones leves y graves el Director General de la Guardia Civil.

Visto el procedimiento en todos sus extremos y los preceptos aplicables al mismo, teniendo en cuenta la propuesta formulada por el Instructor, y a tenor de las facultades que me confiere el artículo 29.1.c) y 2.1.b) de la Ley Orgánica 1/1992.

He resuelto concluir el presente procedimiento sancionador imponiendo a don Antonio Moncayo Torrejón (28.443.425-S), en calidad de titular del puesto ambulante donde se cometieron los hechos, la sanción consistente en multa de trescientos euros con cincuenta y dos céntimos (300,52 €) e incautación de los productos pirotécnicos intervenidos.

De acuerdo con el art. 107.1, 114.1 y 115.1 de la LRJ-PAC, esta resolución no pone fin a la vía administrativa y por tanto contra la misma se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al que se le notifique en forma la presente, ante el Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, pudiendo presentarlo directamente o bien a través de la Comandancia de la Guardia Civil.

De acuerdo con el art. 38.1 de la Ley Orgánica 1/1992, art. 115.1, 138.3 de la LRJ-PAC y art. 21.1 y 2 del RPS, esta resolución definitiva será firme en vía administrativa y por tanto ejecutiva, una vez transcurrido el plazo indicado anteriormente sin hacer uso del derecho a recurrir, o en el caso de haberlo ejercitado, desde la notificación al

interesado de la resolución del mencionado recurso que mantenga el contenido sancionador de la resolución impugnada en los términos que se establezcan.

De acuerdo con el art. 38.2 de la Ley Orgánica 1/1992, a partir de la fecha de la firmeza en vía administrativa de la presente resolución definitiva en los términos previstos anteriormente, la persona expedientada dispone de un plazo voluntario de pago de quince días hábiles para hacer efectivo el importe de la sanción impuesta, bien a través de la Delegación de Hacienda de su residencia mediante carta de pago, o bien en papel de pagos al Estado, presentando al Instructor en cualquier caso la correspondiente carta de pago o los efectos timbrados.

De acuerdo con el art. 138.3 de la LRJ-PAC y art. 21.4 del RPS, hasta tanto se produce la firmeza en vía administrativa de la presente resolución definitiva, se mantiene la cautelar de intervención de los productos para garantizar la eficacia de la sanción.

Igualmente a partir de la citada firmeza, de conformidad con el artículo 299 del Reglamento de Explosivos, la materia reglamentada que se incauta como consecuencia de la resolución sancionadora del presente expediente administrativo será puesta por el Órgano Instructor a disposición del Ministerio de Economía a través del Área Funcional de Industria y Energía de la correspondiente Delegación de Gobierno.

Que transcurrido dicho periodo de pago voluntario sin haber efectuado el mismo, se ejercerán las facultades subsidiarias reservadas a esta Autoridad, procediéndose a su exacción por la vía de apremio administrativa, a través de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondiente, de conformidad con el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 1684/90, de 20 de diciembre, modificado por el Real Decreto 448/1995, lo que puede suponer a los inculcados un recargo de un 20% sobre el importe de la citada multa.

Notifíquese en forma la presente resolución a la persona expedientada.

Madrid, 25 de enero de 2005.—El Director General, P. D. (Orden INT/2992/2002, de 21 de noviembre; BOE 285, de 28 de noviembre), el General de División Subdirector General de Operaciones, José Manuel García Varela.

18.982/05. *Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil sobre notificación resolución recurso de alzada por infracción al reglamento de armas interpuesto por la empresa Skyway Technology España, S. A.*

Por el presente anuncio se notifica a la empresa Skyway Technology España, S. A., a la cual no ha podido ser notificado en su último domicilio conocido, la siguiente resolución dictada por el Subdirector General de Recursos del Ministerio del Interior de fecha 4 de marzo de 2005:

Visto el recurso de alzada interpuesto por Skyway Technology, S. A. representada por Pedro Luis González Anero, contra resolución del Subdirector General de Operaciones de la Guardia Civil de fecha 26/10/2004 y analizados los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—El Subdirector General de Operaciones de la Guardia Civil, previa instrucción del correspondiente expediente, en el que se concedió trámite de audiencia a la interesada, en virtud de resolución de fecha 26/10/2004 impuso a Sky Way Technology, S. A. la sanción de multa de mil euros (1000,00 €), por realizar publicidad de un arma prohibida por el artículo 4º.1. h) del Reglamento de Armas aprobado por Real Decreto 137/93, de 29 de enero (ROE de 5 de marzo), lo que supone incurrir en la infracción grave tipificada en su artículo 156.a), precepto éste que desarrolla el artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Segundo.—Al no estar conforme la interesada con dicha resolución interpone contra la misma el recurso de alzada objeto de la presente, alegando cuanto cree que conviene ala defensa de su derecho.

Tercero.—En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales y reglamentarias.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El artículo 23 de la Ley Orgánica 1/92, tipifica en su apartado a), como infracción grave, «la fabricación, reparación, almacenamiento, comercio, adquisición o enajenación, tenencia o utilización de armas prohibidas o explosivos no catalogados: de armas reglamentarias o explosivos catalogados careciendo de la documentación o autorización requeridos o excediéndose de los límites permitidos, cuando tales conductas no sean constitutivas de infracción penal» En el caso que nos ocupa, ha quedado acreditado en las actuaciones obrantes en el expediente, que la Sociedad interesada realizó publicidad de un arma prohibida por el artículo 4º.1.h) del Reglamento de Armas.

Segundo.—Constituye doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que el principio de legalidad en materia sancionadora no veda el empleo de conceptos jurídicos indeterminados, aunque su compatibilidad con el artículo 25.1 de la Constitución Española se subordina ala posibilidad de que su concreción sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia, de tal forma que permitan prever, con suficiente seguridad la naturaleza y las características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada, y en el supuesto que contemplamos a la sociedad mercantil recurrente se le denuncia en base al artículo 4.1.h) que recoge la prohibición de los instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas y en este caso las armas blancas objeto de publicidad y comercio pueden ser considerados como tales y así lo han valorado tanto los agentes denunciantes como lo valoró en su día la C.I.P. A.E. Además tal calificación de las armas intervenidas fue comunicada con la descripción exacta de las armas intervenidas en el momento de la denuncia, y consta en el Procedimiento (folio 65) escrito de la Intervención de Armas y Explosivos de Vitoria donde se comunica a don Iñaki Odriozola Beizama (Skyw Way Technology, S. A.) que la denominada Daga Gnomo, referencia BS010491, se considera un arma prohibida al estimarse que se trata de un instrumento especialmente peligroso para la integridad física de las personas.

Tercero.—Una vez acreditados los hechos y la autoría de los mismos, sin que por la recurrente se hayan aportado pruebas suficientes que la desvirtúen, ninguna eficacia cabe atribuir al resto de las alegaciones formuladas por aquel que permitan variar el criterio de la resolución recurrida.

Cuarto.—La sanción ha sido impuesta por el órgano competente, de acuerdo con el procedimiento establecido y dentro de los límites previstos, atendiendo a criterios de proporcionalidad, todo ello de conformidad con la normativa vigente que se cita en el primero de los antecedentes de hecho, por lo que la resolución impugnada se ofrece como conforme a derecho, procediendo su confirmación y la desestimación del recurso interpuesto.

Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación, la Subsecretaría del Interior, en uso de las atribuciones en ella delegadas en el apartado Cuarto, nº 2.8 de la Orden INT/2992/2002, de 21 de noviembre (BOE de 28 de noviembre), ha resuelto desestimar el recurso de alzada interpuesto por Sky Way Technology, S. A. representada por Pedro Luis Gonzalez Anero contra resolución del Subdirector General de Operaciones de la Guardia Civil de fecha 26/1 0/2004, que se confirma en todas sus partes.

Lo que notifico a Vd advirtiéndole que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, b), en relación con el artículo 14, nº 1, Primera, todos ellos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación de la presente, de conformidad con lo previsto en el artículo 46, nº 1, de dicha Ley.

Madrid, 4 de marzo de 2005.—El Subdirector General de Recursos, Antonio Doz Orrit.

MINISTERIO DE FOMENTO

18.594/05. *Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de las resoluciones recaídas en los recursos administrativos n.º 228/04 y 1004/03.*

Al no haberse podido practicar la notificación personal al interesado conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse, a efectos de notificación, las resoluciones de los recursos de fechas 30 de noviembre de 2004 y 21 de enero de 2005, respectivamente, adoptadas por el Secretario General de Transportes del Departamento, en los expedientes números 228/04 y 1004/03.

«Examinado el recurso de alzada interpuesto por Transportes Maitxene, S. L., contra Resolución de la Dirección General de Transportes por Carretera de fecha 19 de diciembre de 2003 que le sanciona con multa de 1.500,00 euros por una infracción muy grave, debido a la negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección, por no remitir los discos diagrama requeridos para el ejercicio de la labor inspectora, infracción tipificada en el artículo 140.e) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y en el artículo 197.e) del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, que aprueba el Reglamento de esta Ley, y teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por la Inspección General del Transporte Terrestre dependiente de este Ministerio, se levantó Acta de inspección n.º IC/1348/2003 de fecha 2 de julio de 2003 contra el recurrente, en la que se hicieron constar los datos que figuran en la resolución recurrida.

Segundo.—Dicha Acta dio lugar a la incoación del procedimiento sancionador el día 4 de julio de 2003, comunicándose al interesado mediante notificación de denuncia de fecha 15 de julio de 2003.

Tercero.—Contra la citada resolución, cuya notificación tuvo lugar el día 26 de diciembre de 2003, el interesado interpone recurso de alzada el día 21 de enero de 2004, en el que alega no estar de acuerdo con los hechos, solicitando la anulación o, en su caso, reducción de la sanción impuesta.

Este recurso ha sido informado por el órgano sancionador en sentido desestimatorio.

Fundamentos de derecho

Primero.—El recurrente niega los hechos, alegando que la carga de la prueba corresponde al instructor del procedimiento sancionador, por lo tanto, añade, se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.

En primer lugar debe aclararse que el punto 3 del artículo 137 de la LRJ-PAC, establece que los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad pública, como es el caso de los Inspectores de Transporte, en orden a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

Es preciso señalar también que con la notificación de la denuncia se pone en conocimiento del recurrente su derecho a alegar por escrito lo que a su defensa convenga aportando las pruebas que considere oportunas. Con el escrito de alegaciones, el recurrente no propone ni aporta prueba ninguna que acredite el envío de la totalidad de los discos requeridos por los Servicios de Inspección de este Ministerio, por lo que los hechos y la infracción cometida no se han visto desvirtuados.

El artículo 35.c) de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJ-PAC, establece que los ciudadanos tienen derecho a obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a